

# Estado y sociedad en el Perú. Evolución y perspectivas

Omar de León Naveiro



## I. Introducción

Este trabajo es un intento de presentar algunas claves para la comprensión del proceso sociopolítico peruano. Surge, en cierto sentido, como reflexión preliminar en el marco de una investigación sobre diversos aspectos sociales y políticos del país andino. Por ello, si las afirmaciones realizadas en ciencias sociales deben ser siempre revisadas y complementadas, las hechas aquí deben serlo doblemente.

Es ya un lugar común con respecto a los países de América Latina, decir que existe una profunda brecha entre Estado y sociedad. Perú no es la excepción. Sin embargo desde hace un par de décadas se están produciendo en la sociedad peruana una serie de fenómenos originales que obligan a replantear, en algunos casos, las categorías necesarias para un estudio de la cuestión. Por diversas razones los actores sociales, y especialmente aquellos que sufrieron prolongados periodos de marginación económica, política y cultural, comenzaron a generar sus propias respuestas ante un Estado excluyente y una organización social profundamente injusta.

Este proceso está hoy abierto y muestra, en su riqueza, innumerables matices y ángulos de enfoque. En estas páginas recogemos algunos de ellos, de manera sumaria y sin perder la perspectiva general, para intentar una descripción de sus manifestaciones y una comprensión de sus significados. Con ello esperamos hacer más nítido el desarrollo socio-político del país hacia la consolidación de una estructura política más justa.

No podemos evitar una referencia a la historia en la medida en que ésta nos aporta la identificación y comprensión de fenómenos sociales que están presentes de alguna manera en los acontecimientos de hoy, condicionándolos y haciéndolos más complejos.

## II. Aspectos de la evolución histórica

Durante el siglo XVIII fue configurándose el tipo de sociedad colonial que serviría de base a las formas de dominación que se consolidaron después de la independencia. En la segunda mitad de la centuria se

acentuó en declive de la explotación de plata en el alto Perú, región del Sur Andino que había sido fuente del esplendor colonial de los últimos doscientos años. Comenzaban a cobrar protagonismo otras regiones y actividades económicas. En la sierra del Norte, donde la población era mayoritariamente mestiza, se desarrolló la agricultura de irrigación, con utilización de diversas formas de trabajo precario como el peonaje o yanaconaje, integrándose rápidamente a los circuitos hispanoamericanos. La costa era una región desértica cruzada por valles fértiles en torno al cauce de los ríos donde se cultivaba azúcar, algodón y vid en sistemas de plantación con uso de mano de obra esclava, principalmente de raza negra <sup>1</sup>.

Con el agotamiento de las vetas de Potosí y la lenta transformación del sistema de encomiendas en el de hacienda, la dominación colonial continuó basándose en la explotación estamental corporativa de la sociedad indígena por la española, pero organizada ahora en torno a una compleja red de relaciones patrono-cliente <sup>2</sup> y centrada en la producción agrícola. La contrapartida de este poder patrimonial, heredero de la España medieval, se encontraba en el tejido burocrático implementado por la Corona, que impedía cualquier fragmentación territorial. Asimismo, con la diversificación del comercio exterior, especialmente de productos costeros, Perú fue insertándose en la red del mercado internacional, controlada por la expansiva Inglaterra. Esto ayudó a configurar una burguesía comercial cuyo poder aumentaba a medida que la inviabilidad del monopolio español se hacía más evidente.

Después de la guerra de la independencia y ante la ruptura del orden patrimonial los grupos locales emergentes buscaron reconstruirlo en torno a su hegemonía. Los dirigentes de la sociedad rural fueron los más beneficiados por la dinámica de la guerra. Eran ellos quienes controlaban las milicias, soporte directo de su presencia política. En la sociedad colonial su riqueza estaba mediatizada por los grupos urbanos que controlaban el comercio a través de sus relaciones con los centros internacionales y fundamentalmente con la metrópoli. Después de la guerra, tres factores se sumaron para alterar esta relación de fuerzas:

1. La ruptura del comercio con la metrópoli obligó al replanteamiento de las relaciones comerciales. Esto originó la debilidad coyuntural de los exportadores que se apresuraron a establecer vínculos dependientes con Gran Bretaña.

2. La guerra afectó especialmente los bienes muebles y la estructura productiva. La reconstrucción del país pasaba entonces necesariamente por el rápido restablecimiento de las actividades agrícolas y extractivas.

3. Los terratenientes controlaban la organización militar, y por ello estaban en condiciones de exigir la instauración de un ordenamiento político acorde con sus intereses <sup>3</sup>.

Ese orden político era el derivado de unas relaciones sociales patriarcales y un modo de producción precapitalista, expresado en la figura del caudillo regional y su subordinado estamental: el cacique local.

La expresión política más acabada de esta nueva relación de fuerzas fue la Confederación Peruano-Boliviana, organizada en torno a una nueva y más vigorosa proyección del espacio andino. Después de su fracaso, en el que no fueron ajenos los grupos con intereses en las actividades económicas de la costa, dio comienzo un período de organización nacional encarnado en la figura del general Ramón Castilla y apoyado en la floreciente explotación guanera de la costa Sur. Asimismo, la agricultura de la costa se recuperaba de la crisis que padecía desde fines del siglo XVIII.

Estos dos hechos tienen especial significación porque representan la cristalización, ahora en la República, de una tendencia histórica que lleva a la segmentación social y territorial del Perú. Por un lado la región costera, vinculada a través de su producción agrícola al sistema económico mundial y especialmente a Gran Bretaña. Por otro, la sierra, donde se producen en latifundio y mediante trabajo precario, alimentos para el exiguo mercado interno.

Esta separación tiene su correlato a nivel político en los constantes enfrentamientos entre un ejército serrano y mayoritariamente mestizo y un civilismo liberal y costero, que constituyen la clave para la comprensión de la historia peruana del siglo XIX.

Hacia fines del siglo, coincidiendo con la afluencia de considerables inversiones norteamericanas, se refuerza la hegemonía de los grupos oligárquicos de la costa. La era de Nicolás de Piérola (1879-1899) es el segundo período de institucionalización de las prácticas políticas. Se produjo entonces la afluencia de capitales extranjeros, destinados a la plantación de azúcar en la costa y a la explotación de cobre en la sierra, determinando la proletarianización de un conside-

rable número de indígenas y la aparición de una nueva oligarquía exportadora: los «barones del azúcar».

El Estado fue adoptando la configuración característica de los regímenes oligárquicos. Liberal a ultranza en lo económico, conservador y reaccionario en lo social, su función prioritaria era asegurar unas condiciones óptimas de producción y reproducción desde la racionalidad económica del capitalismo.

Las primeras décadas del siglo estuvieron signadas por la figura de Augusto Leguía. Llegado a la presidencia en los comicios de 1908, inició una etapa singular en la historia del país; especialmente cuando en 1919 se autoproclamó dictador. En cierto sentido su gobierno representaba la reconstrucción, a nivel nacional, de la cabeza patriarcal, característica de la sociedad tradicional peruana. Leguía encarnaba una forma de caudillismo autoritario, pragmático y demagógico cuando hiciera falta, que sostenía su poder sobre una trama de relaciones advenedizas y con dosis considerables de corrupción. Acentuó el poder de los caciques locales sin aplicar políticas que favorecieran a las zonas interiores. Gobernó para las oligarquías, sin permitir la hegemonía de ninguna de ellas y sintonizó por primera vez con los grupos populares de la costa, cuyos intereses no representaba.

Mientras tanto, con el crecimiento económico se estaban produciendo transformaciones sociales que tendrían importantes consecuencias políticas. La aparición de las primeras industrias y el crecimiento de las inversiones (especialmente norteamericanas, debido a la liquidez existente en ese país por el triunfo en la I Guerra Mundial) produjeron una diversificación de las actividades económicas y el surgimiento de nuevos actores sociales. El reducido proletariado urbano comenzó su lucha por el salario, por mejores condiciones de trabajo y por el reconocimiento de su ciudadanía política. El campesinado iniciaba un disperso conjunto de movilizaciones, especialmente en aquellas zonas del país en que avanzó más rápido su proletarianización. Así ocurrió en las plantaciones costeras y fundamentalmente en el Norte. La sierra del Sur permanecía apartada de este proceso social y económico. Era «otro Perú» del que nos hablaba Mariátegui<sup>4</sup>. En un siglo de vida, la República ignoró a los pueblos indígenas, que constituían la gran mayoría del país, uniendo la marginación política al sojuzgamiento económico y cultural. Asimismo habían co-

brado cierto protagonismo el funcionariado, los profesionales, los comerciantes minoristas y los obreros especializados, configurando una creciente clase media.

Los intereses de estos grupos no hallaban una identificación con los representados en el juego político que hasta entonces había tenido lugar. Por ello surgieron en la década de 1920 dos agrupaciones que tendrían gran importancia en la vida política del país: el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) y el PCP (Partido Comunista Peruano). El APRA, promovido por Raúl Haya de la Torre se levantaba sobre un intento de adaptación del marxismo a la realidad americana, proclamándose indigenista y antiimperialista. Su debilidad teórica y estrecha dependencia del líder dieron a este partido una trayectoria errática en la vida política peruana pero posibilitaron un pragmatismo que le aseguró una importante clientela política, formada especialmente por el proletariado rural y urbano y las clases medias urbanas. Completamente distinto es el caso del PCP, organizado en torno a la figura de José Carlos Mariátegui. Coherencia ideológica y acercamiento a las comunidades indígenas fueron las notas relevantes en este partido que nunca tuvo la importancia numérica del APRA.

De alguna forma el régimen de la «Patria Nueva» instaurado por Leguía en 1920 representaba una forma innovadora de enfrentar el conflicto en una sociedad cambiante. El protagonismo de los nuevos actores sociales cristalizó en el reconocimiento de algunas reivindicaciones obreras primero y en una tibia consideración del problema indígena después. En estos años se consiguió la integración del mercado nacional y un notable desarrollo urbano, impulsado por el incipiente proceso migratorio campo-ciudad, como consecuencia de la expansión territorial de las haciendas serranas.

Con la caída del régimen (1930) y debido a su forma de articulación, se produjo un rápido transvase de identificaciones políticas hacia sujetos más o menos consolidados. Al no existir una figura institucional capaz de convertirse en depositaria del consenso y perpetuar así formalmente el régimen (ya sea partido político, sindicato, movimiento, etc.), los espacios políticos fueron capitalizados por los nuevos partidos progresistas.

El ocaso de la estrella política de Leguía está relacionado con la crisis económica de 1929. El «dictador civil» no ofrecía garantías en el sentido

de mantener a cualquier precio el nivel de las exportaciones peruanas, con el consiguiente perjuicio para los grupos relacionados con esta actividad. Por una vez, después de muchos años, la hostilidad entre la oligarquía exportadora costera y el ejército devino alianza. Sin embargo, por las transformaciones sociales aludidas, el nivel y la generalización del conflicto político generado no tendría precedentes y marcaría la historia del país en los próximos treinta y cinco años. En este período se sucedieron regímenes democráticos, coincidiendo generalmente con coyunturas externas favorables, con dictaduras militares que reestablecían las condiciones sociales y económicas acordes con los intereses de la oligarquía. Los partidos con mayor base social fueron sistemática y ferozmente perseguidos. Así ocurrió con el APRA y el PCP.

En la década de 1950 tuvo lugar una cierta diversificación industrial que motivó la expansión de las clases medias y bajas urbanas. La incorporación masiva de capital se orientó en esta oportunidad a la moderna industria urbana de transformación y al sistema de plantaciones costeras. El proceso de urbanización se aceleró notablemente, alentado por el crecimiento de la agricultura de la Costa y el estancamiento endémico de la Sierra. El fenómeno migratorio cobró una magnitud sin precedentes, agudizando el viejo problema de la desarticulación del territorio a través del despoblamiento de la Sierra y creando en las ciudades costeras un microcosmos marginal, contrapartida del macrocosmos nacional. Las políticas urbanas, no exentas de un matiz populista, acometidas durante el gobierno del general Odria (1948-1956) intentaron remediar las consecuencias del éxodo a las ciudades.

Con esta dinámica, el proceso de diferenciación regional y social se intensificaba. Por primera vez, en 1956 se intentó consolidar el capitalismo en la Sierra, para lo que se diseñó una reforma agraria que derivó en la ruptura del pacto entre las élites costeras y las serranas. En lo alto de la pirámide social comenzaba también un proceso de descomposición. En este sentido, tuvo importancia la política de industrialización por sustitución de importaciones acometida decididamente en 1959. Dentro del bloque dominante se perfilaron dos tendencias. Una, la de los grupos oligárquicos tradicionales de la costa, sostenía el mantenimiento del modelo exportador; la otra, representada por un sector de la burguesía y las clases medias, planteaba la necesi-

dad de realizar reformas estructurales para asegurar el desarrollo del país, en las que el Estado debía jugar un papel central. Esta es la tendencia recogida en el proyecto político del presidente Belaúnde (1963-1968).

En cierto sentido, mientras el APRA representó una alternativa revolucionaria o al menos reformista, el control del conflicto social y el mantenimiento del orden oligárquico se conseguían regulando la relación entre este partido y el statu quo, a través de una pragmática combinación de tolerancia y represión. En la medida en que el APRA y Acción Popular (el partido de Fernando Belaúnde) dejaron de ser vehículos de las demandas populares, se fue produciendo un vacío de representatividad política y la radicalización de algunos de sus cuadros. En su azarosa trayectoria, el APRA, siempre liderado por Haya de la Torre, realizó convergencias que tuvieron altos precios. La aparición de la propia AP puede verse como el resultado del acercamiento entre Haya y el ex-presidente Prado (quien había ordenado años antes una cruda represión del aprismo) para las elecciones de 1956. El propio Belaúnde era un antiguo aprista. Más tarde, durante el gobierno de éste, el APRA estableció una coalición con el odrismo, liderado por otro de sus tenaces perseguidores de antaño. Otra escisión importante se produjo con la formación del «APRA Rebelde» por un sector del partido que denunciaba la alianza del partido con la oligarquía. Más tarde este grupo tomaría el nombre de Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

La década de 1960 fue un período de politización creciente de la sociedad peruana. En las zonas urbanas, ante la incursión de las masas migrantes expelidas de las zonas rurales, aumentaba la adhesión a las ideologías de izquierda. En las zonas rurales se producían levantamientos de campesinos para recobrar las tierras enajenadas. Esta dinámica social ocasionó la rápida descomposición de las relaciones patrimoniales, desplomando los mecanismos tradicionales de control social. Ahora los movimientos reivindicativos, tanto en el campo como en la ciudad, no podían ser encauzados en la institucionalidad vigente, ya que demandaban cambios profundos en la organización socio-económica y política del país. En 1963 un golpe militar impidió a Haya el acceso a la presidencia de la República después de haber ganado las elecciones del año anterior. Esta circunstancia ahondó la crisis de legitimidad que

sufría el sistema político, creando las condiciones para una radicalización de los planteamientos. En 1964 un sector del campesinado, liderado por Hugo Blanco, emprendió una acción organizada de gran trascendencia que concluyó con la toma de tierras en la provincia cusqueña de La Convención. Un año después apareció el primer grupo guerrillero, organizado en torno al MIR y siguiendo una estrategia insurreccional de tipo foquista. La falta de un contacto estable con el movimiento campesino le impidió una implantación más firme y rápidamente fue desarticulado. Acaso este hecho revele que la superación de las estructuras oligárquicas no era igualmente caracterizada desde la racionalidad criollo-costera y desde el universo étnico-cultural del altiplano. Curiosamente esta fractura atraviesa la historia del Perú republicano organizado en torno a los intereses de los grupos dominantes costeros, para penetrar también en el pensamiento de la izquierda como un anticipo de lo que ocurriría en la década de 1980.

El APRA, que mantenía su histórico antagonismo con el ejército, se perfilaba en las elecciones de 1968 como claro ganador ante el desgaste de AP, partido en el gobierno. A esta circunstancia, generadora por sí misma de tensiones, se sumaban la crónica situación socio-económica estructural y la crítica coyuntura (caídas de las exportaciones y del crecimiento, aumento de los déficit público y de la balanza de pagos y crecimiento de la inflación). El golpe militar que se produjo ese año, abortando una vez más la posibilidad de un gobierno aprista, tendría unas características peculiares y llevaría a cabo profundas reformas en la sociedad peruana.

### III. El período de Velasco Alvarado

En los últimos años de la década de 1960 las instituciones vigentes se mostraban incapaces de contener y encauzar la creciente movilización de los sectores sociales históricamente postergados mediante diversos procesos, tanto de explotación y marginación económica como de exclusión política.

El gobierno militar encabezado por el general Velasco Alvarado mostró en este sentido una sensibilidad desconocida hasta entonces en los uniformados del continente. En el momento de

constituirse su gobierno podemos sintetizar sus premisas en cuatro puntos:

1. Las Fuerzas Armadas se deben ocupar de la seguridad nacional, tanto exterior como interior, por lo tanto han de luchar contra la subversión interna. Hasta aquí, una simple aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

2. La subversión es producida por una estructura de poder responsable de la desigualdad, pobreza y retraso del país. En esto tenemos el primer aporte original en la interpretación de los fenómenos sociales por parte de un poder militar.

3. Los políticos son incapaces de realizar las reformas estructurales necesarias porque son parte de esa estructura de poder.

4. Las Fuerzas Armadas están fuera de los intereses de clase y son representantes del interés general. Por ello asumen el poder como institución, para llevar a cabo un programa de profundas reformas estructurales cuyos objetivos principales eran:

- Erradicación del poder oligárquico.
- Integración nacional a diversos niveles por medio de la participación.
- Replanteamiento de las condiciones de la dependencia externa <sup>5</sup>.

Es importante destacar que en estos momentos la distancia entre el Estado y la sociedad era enorme. Esta se relacionaba con las instituciones del poder a través de una red de sucesivas intermediaciones de tipo clientelístico, propias de una sociedad patrimonial. En este medio el personalismo y el caudillismo eran aún parte del sedimento antidemocrático de la sociedad. No podemos olvidar que los grandes partidos se construyeron generalmente en torno de alguna relevante figura política, como son los casos de Haya y Belaúnde. El propio Velasco representaba, en cierto sentido, una versión renovada del líder carismático.

El gobierno militar puso en práctica un extenso programa de reformas. En el plano socio-económico se procuró una redistribución del ingreso y un aumento de la presencia de las capas sociales menos favorecidas. Se expropiaron empresas, se reconocieron entre 1969 y 1975 más de 2.000 organizaciones sindicales, entre ellas la poderosa Confederación General de Trabajadores Peruanos (CGTP), de filiación comunista. Se creó asimismo una comunidad industrial, desde la que se facilitaba a los trabajadores el acceso a la propiedad de las empresas. En las zonas rurales se acometió una profunda reforma agraria

distribuyendo tierras entre los campesinos, generalmente para explotación comunitaria e implementando políticas para la modernización capitalista de la Sierra. Se creó la Confederación Nacional Agraria (CNA) formada por los beneficiarios de la reforma y desarrolló su organización en aquel momento la Confederación Campesina de Perú (CCP) que había sido creada desde el PCP en 1947 como continuadora de la Federación General de Yanacostas y Campesinos del Perú, organizada por Materiategui en 1929. La CCP aglutinaba a la mayor parte del proletariado agrícola así como al campesinado marginado de la reforma.

En el plano socio-político, la estrategia del régimen se basaba en la creación de una nueva forma de articulación entre Estado y sociedad cimentada en la participación. Para ello se creó el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS). Según uno de sus mentores, el SINAMOS era una «organización político-estatal encargada de transferir progresivamente el poder de decisión política a las organizaciones sociales surgidas a partir del desarrollo de las reformas estructurales»<sup>6</sup>.

En cierto sentido puede decirse que durante el período de Velasco (1968-1975) se derrumbaron las instituciones del Estado oligárquico, al tiempo que el gobierno militar intentaba encauzar, mediante la creación de una nueva estructura institucional, los vigorosos procesos sociales que se desencadenaron. Es aquí donde se puede apreciar una de las contradicciones más graves en esta dinámica. Cada vez más ese Estado, el que había inducido la participación de vastos sectores sociales históricamente reprimidos y había aumentado considerablemente su presencia en todos los ámbitos de la vida del país, evidenciaba que no había emergido como expresión política de esa sociedad.

A medida que el nivel de organización de la sociedad se hacía más complejo gracias al aprovechamiento de los nuevos espacios de participación creados, los graves problemas estructurales que el país arrastró secularmente se hacían más visibles. El carácter parasitario de una oligarquía sujeta a una visión precapitalista de las relaciones sociales y volcada hacia afuera; la falta de dinamismo y sentido empresarial de una joven burguesía inclinada a la ganancia rápida y sin una proyección integradora a nivel nacional; la actitud expoliadora de las empresas transnacionales y los grupos financieros, favorecidos por la connivencia o timidez de los gobiernos; el

abismo económico y cultural que separaba a las distintas regiones del país sin que se hubieran hecho esfuerzos serios para superarlo, prevaleciendo una dinámica que acentuaba aún más las desigualdades; la permanencia de mecanismos raciales y culturales de diferenciación social; así como el cierre del universo político en unas concepciones que combinaban los intereses de clases con un trasfondo criollo-céntrico; eran algunos de esos problemas que requerían impostergables respuestas. El gobierno militar, por su propia naturaleza y por la composición interna de las Fuerzas Armadas<sup>7</sup>, no estaba en condiciones de darlas, la profundización de las reformas emprendidas requería un componente de radicalidad que la institución militar y una parte importante de la sociedad no estaban dispuestas a asumir. La experiencia había encontrado sus propios límites cuando la crisis económica de 1974 precipitó un cambio de orientación. En 1975 el general Velasco fue desplazado de la presidencia por el general Morales Bermúdez, emergente de los sectores institucionalistas del Ejército.

En siete años de gobierno militar el país había experimentado cambios importantes. La redistribución del ingreso mejoró la situación del proletariado y las clases medias cuyo peso político y número crecieron considerablemente. Asimismo apareció un sector de la burguesía vinculado a la producción de bienes de consumo, con pocos intereses en el extranjero y relacionado con los flujos estatales de crédito<sup>8</sup>. El aparato del Estado creció y extendió su presencia a lo largo y ancho del país, ocupando en 1975 a un 11% de la fuerza de trabajo (lo que representa un 60% más que en 1967). Se desarrolló el movimiento cooperativo en diversas líneas, con especial importancia en las zonas rurales, afectando a más del 10% del campesinado.

Sin embargo, los cambios probablemente más importantes para el futuro del país se dieron a nivel de la cultura política. En primer lugar las oposiciones sociales fueron cada vez más resolviéndose en torno a la estructura del Estado. A la vista de los acontecimientos, las clases dominantes fueron alimentando una actitud de desconfianza hacia las Fuerzas Armadas y, por otro lado, los grupos emergentes encontraban en aquél una instancia de defensa de sus intereses. En segundo lugar, el aprendizaje político de participación que habían vivenciado los distintos grupos sociales les hacía presionar inexorablemente hacia la democratización integral de la sociedad.

Finalmente, se produjo una desdramatización de las opciones políticas de izquierda y un significativo aumento de la actividad organizativa de sus partidarios.

Desde la perspectiva que nos interesa, podemos caracterizar la segunda etapa del régimen militar (1975-1980) como un intento de controlar la expansión de las organizaciones sociales y, especialmente después de las huelgas generales de 1977, devolver el poder a los civiles. El despido de funcionarios velasquistas, la represión de huelgas y movimientos sociales y los planes de estabilización económica con los cuales el gobierno militar pretendía volver a la órbita del Fondo Monetario Internacional, sólo consiguieron aumentar la presión en esta sociedad que se había puesto en marcha. La construcción de una institucionalidad democrática se tornaba, entonces, condición necesaria para la evolución del país.

#### IV. Una transición impulsada desde abajo

En medio de un ambiente socio-político agitado y caracterizado por el creciente protagonismo de las organizaciones populares, las Fuerzas Armadas diseñaron un calendario de transición a un régimen institucional. Como primer paso se eligieron representantes para la Asamblea Constituyente en un proceso electoral en el que se apreciaron los primeros resultados objetivos del período de Velasco: los partidos de izquierda (sin contar entre tales al APRA) recogieron un tercio de los votos. Sin embargo en la Asamblea evidenciaron cierta falta de desarrollo en sus ideas para contribuir de modo original en la creación de nuevas instituciones, haciendo patente que se hallaban por detrás de las fuerzas sociales que representaban.

La Asamblea sesionó en el período 1978-1979, al final del cual sancionó una Constitución que entraría en vigor en 1980. Las principales características de esta Carta Política, que está aún vigente son:

— Establece un Poder Ejecutivo fuerte, con amplias facultades. Estas se manifiestan principalmente en su capacidad de legislar mediante el dictado de decretos legislativos, en la instauración del Régimen de Excepción, el ejercicio de la política económica y la jefatura de las Fuerzas Armadas.

— Organiza el Poder Legislativo en dos Cámaras, la de Diputados y la de Senadores. La primera, eminentemente política, tiene a su cargo el control del Ejecutivo. La segunda, de representación territorial.

— Establece la creación del Jurado Nacional de Elecciones, máximo órgano en materia electoral.

— Crea el Tribunal de Garantías Constitucionales con competencias para resolver casos de habeas corpus, amparo e inconstitucionalidad.

— Fija el período de gobierno en cinco años. El presidente de la República no puede ser reelegido hasta pasado un período. Los parlamentarios pueden ser reelegidos indefinidamente por períodos de cinco años. Los órganos municipales se eligen cada tres años.

— La participación política queda restringida al sistema de partidos y al ejercicio del sufragio. Este se establece secreto y obligatorio desde los dieciocho a los setenta años e incluye a analfabetos y no residentes, colectivos estos que estaban excluidos en la Constitución de 1933. Este ensanchamiento de la base electoral permite que aumente el porcentaje de la población habilitada para sufragar desde el 28,5% de 1978 hasta el 45,1% de 1985. Sin embargo, para ser elegible es necesario saber leer y escribir español.

En las elecciones de 1980 triunfó Acción Popular, liderada por Fernando Belaúnde Terry, cuyo gobierno fue, en cierta medida, continuación de la segunda etapa de la dictadura. Signado por la crisis económica, que afectó a todos los países de la región, el gobierno aplicó una receta neoliberal que condujo a la caída drástica de los salarios reales y al aumento del desempleo (en esta coyuntura un 50% de la población activa se hallaba desempleada o con un empleo irregular). Hacia el final del gobierno de AP la situación social y económica del país era crítica. El descontento había llevado a la movilización de importantes sectores sociales en señal de protesta; el nivel de violencia política había crecido con la aparición de un grupo guerrillero que tendría una presencia creciente a lo largo de la década (Sendero Luminoso) y con la militarización de una parte del territorio del país.

En las elecciones de 1985 se producen varios hechos de importancia<sup>10</sup>. El APRA accede al poder después de cincuenta años de veto militar en un proceso electoral en el que los partidos de izquierda y centro-izquierda obtienen el 78% de los votos, confirmando un cambio significativo

en las concepciones políticas de la población. Después de asumida la presidencia de la República por Alan García Pérez se establece un consenso en torno a su figura que le asegura el apoyo de más del 80% de la población. El alto nivel de participación en los comicios (en torno al 90%) significa un triunfo sobre Sendero Luminoso que boicoteó el proceso electoral. Se confirma así una coyuntura excepcional para la acción política que lentamente se iría ensombreciendo. Vamos a encarar su análisis desde la perspectiva de los principales actores que intervienen.

## V. Reflexiones en torno a los actores sociales

Pese a la dinámica social desarrollada en las últimas décadas, en los años ochenta persiste en el Perú la profunda brecha que se proyecta desde la historia y atraviesa los planos político, económico y étnico-cultural. Dijimos que los constituyentes de 1979 no acertaron a crear una institucionalidad capaz de ofrecer un marco válido de acción y encauzar a esta sociedad en movimiento. Se prolongó así desde el Estado la existencia de dos países paralelos. Por un lado «el Perú oficial de las instituciones del Estado, los partidos, la banca y las empresas, los sindicatos, las universidades y colegios, las Fuerzas Armadas y la Iglesia; de los tribunales, la burocracia y el papel sellado; de la cultura exocéntrica; y, por el otro, el Perú marginado: plural y multiforme; del campesinado y la masa urbana, de las asociaciones de vecinos, los cabildos tradicionales, las rondas y varayoc; de los talleres clandestinos, los (vendedores) ambulantes y de las economías de trueque, de reciprocidad y de mera subsistencia; de los cultos de los cerros, la espera de Inkarrí y la devoción a las santas y beatas no canonizadas; el Perú (...) bilingüe, analfabeto y a veces, monolingüe quechua, aymara o amazónico»<sup>11</sup>.

Por ello es evidente que intentar un acercamiento a los fenómenos sociales peruanos desde la perspectiva de la institucionalidad oficial constituiría un error tan grave como hacerlo desde la pura informalidad. Incontestablemente y pese a las resistencias de los sectores privilegiados diversos colectivos están construyendo su propia institucionalidad y participando desde allí en el plano político. Atendiendo a estas con-

sideraciones haremos un breve relevamiento de las instancias participativas que caracterizan, a veces dramáticamente, la década de 1980.

### 1. Los partidos políticos

Constituyen, como dijimos, el marco establecido legalmente para la acción política. Desde la transición a la democracia vienen experimentando intensos replanteamientos.

El APRA enfrentó, además de los cambios sociales producidos durante el gobierno militar, la desaparición de su líder histórico Víctor Haya de la Torre, fallecido en 1980. Esta circunstancia y el fracaso en las elecciones presidenciales de 1980 plantearon una crisis generacional que fue resuelta en el XII Congreso Nacional del Partido (octubre de 1982) con la designación de Alan García Pérez como secretario general. Aparecía así una nueva figura carismática que conectaría perfectamente con los residuos personalistas de la práctica política y social peruana. El nuevo secretario se convierte de inmediato en una instancia mediadora en el seno del partido entre los viejos líderes y los nuevos tecnócratas. Busca su democratización al tiempo que intenta recuperar su antigua ideología; define su base social como un movimiento interclasista, reconociendo tres enemigos: el imperialismo, la pobreza y la subversión<sup>12</sup>.

En las elecciones presidenciales de 1985 obtuvo un amplio triunfo (53% de los votos), emprendiendo una acción de gobierno que puede caracterizarse como la continuación del velasquismo. La articulación dependiente de la economía peruana en el Sistema Económico Mundial era considerada responsable de los desajustes en esta sociedad que había sido dominada desde un Estado que solamente representaba los intereses de las clases dominantes, excluyendo de la participación política a la mayoría de la población. La función del Estado debía ser entonces redefinida, convirtiendo a la democracia, ante todo, en un instrumento de transformación económica.

Lentamente fue el presidente alejándose del partido y de la sociedad y refugiándose en un estrecho grupo de colaboradores. Emergieron sus rasgos personalistas y autoritarios, perdiendo gran parte de la popularidad de los primeros momentos<sup>13</sup>.

Como consecuencia de estos hechos el liderazgo del presidente fue puesto en duda desde su propio partido. En el Congreso Nacional de



agosto de 1988 fue nombrado secretario general Luis Alva Castro, economista, ex primer ministro de García y representante del grupo de tecnócratas del partido. Dio comienzo una nueva etapa organizativa en el APRA, basada en la positiva imagen asociada al primer año de gobierno.

Después del apoyo masivo de la población a los partidos de izquierda, logró cristalizar una coalición aglutinando a grupos relativamente heterogéneos. Izquierda Unida (IU) nació en 1981 y consiguió buenos resultados en las elecciones municipales de 1983, cuando su candidato, Alfonso Barrantes Ligán fue elegido alcalde de Lima<sup>14</sup>. Su línea de acción se desarrolla en dos sentidos; por un lado siguiendo de cerca a los movimientos sociales consigue arraigo en vastos sectores populares; por otro, buscando una respuesta al principal reto que enfrenta la coalición: la definición de unos lineamientos programáticos y una estrategia que englobe los planteamientos de los partidos componentes, especialmente respecto del debate en torno a la vía de acceso al poder. Esta cuestión, resaltada por las acciones de los grupos armados, amenaza su desintegración o la fractura de alguno de sus partidos (es el caso del PUM, en el que se perfilan un sector «libio» partidario de la vía revolucionaria y un sector democrático). Como principal grupo opositor no parece haberse desgastado con este debate interno aunque es pensable que las tensiones aumentarán en la medida que se haga necesario proponer medidas concretas de acción política. Resulta evidente, asimismo que el peso electoral de la coalición es muy superior al de sus miembros por separado.

Después del desastre electoral de los partidos de derecha y centro-derecha (sumados recibieron el 15% de los votos), esta zona del espectro político está sufriendo una importante reestructuración.

Por un lado se encuentran los partidos tradicionales Acción Popular (AP) y el Partido Popular Cristiano (PPC). El primero de ellos liderado por Fernando Belaúnde Terry apareció en la segunda mitad de los años cincuenta, apoyado por sectores de las clases medias, de la burguesía y del estudiantado. Un liderazgo de corte carismático le permitió conectar con las masas y acceder en dos ocasiones a la presidencia de la República, pero esa misma característica le crea serios problemas a la hora de consolidarse institucionalmente y enfrentar el cambio generacional. El PPC apareció en 1966 como una escisión del Par-

tido Demócrata Cristiano pero manteniéndose en la misma línea. Su mejor resultado electoral fue en las elecciones presidenciales de 1985, donde su líder Luis Bedoya Reyes obtuvo el 10,2% de los votos.

Por otro lado se observa la aparición de una nueva derecha en torno a otro líder: Mario Vargas Llosa y su movimiento «Libertad», que cobró fuerza en la oposición a la nacionalización de la banca decretada por el presidente García. Bajo las consignas de un obsesivo anticomunismo y antiaprimismo se funda el Frente Democrático (FREDEMO), con la mirada puesta en las próximas elecciones presidenciales de 1990. Sus concepciones sociopolíticas pueden sintetizarse en las siguientes proposiciones: el Estado conspira contra la iniciativa individual, manteniendo los privilegios de algunos grupos y demostrando una y otra vez su ineficiencia; los grupos de población subintegrada llamados «informales» presentan una alternativa socio-económica revolucionaria en la medida en que se eliminen los obstáculos legales que conspiran contra sus actividades «empresariales», obstáculos generalmente de carácter impositivo<sup>15</sup>. El FREDEMO cuenta con la concurrencia de AP y del PPC y su propuesta consiste en reducir el rol del Estado y garantizar una amplia libertad política y económica aplicando medidas monetaristas.

## 2. Los movimientos sociales

Mucho se ha escrito sobre la heterogeneidad estructural de las sociedades latinoamericanas<sup>16</sup>. Aunque Perú presente, acaso, un ejemplo paradigmático al respecto, no vamos a abordar aquí este tema. Solamente dejaremos explícito que el modo de producción capitalista se ha impuesto sólo fragmentariamente en el Perú, dejando extensas áreas de la economía, especialmente en las actividades productivas, bajo formas precapitalistas. Esta debilidad del capitalismo en el país impidió que las relaciones de clase que le son inherentes quedaran nítidas, emergiendo con vigor otras formas de diferenciación social, especialmente las étnico-culturales. Realizar un esquema representativo de la estratificación social en estas sociedades no es algo sencillo. Para los objetivos de este trabajo es útil el intento de agrupar los sectores sociales en función del grado de desarrollo de las fuerzas productivas de que disponen<sup>17</sup>. Como veremos seguidamente, esta agrupación trasciende al plano socio-económico

para abarcar los más diversos aspectos de la vida social.

De este análisis resulta la identificación de cuatro sectores perfectamente diferenciados, no sólo por el lugar que ocupan dentro de la estructura productiva, sino también por sus niveles de calidad de vida, representatividad política, acceso a los medios de comunicación, emplazamiento geográfico y grado de articulación interna. Son los sectores urbano-moderno, rural-moderno, urbano-informal y rural-tradicional. En los dos primeros el modo de producción capitalista y las instituciones del Estado alcanzan máxima vigencia. Su omnipresencia en el aparato estatal a través de la dirección política y económica permite subordinar a los otros sectores a su modelo de desarrollo. Su horizonte referencial trasciende las fronteras del país. Con algunas diferencias entre ellos (el sector rural, ubicado geográficamente en los valles de la Costa y en la Sierra Norte, estuvo más vinculado a la producción agrícola para exportación, tiene una mayor componente de población mestiza y su horizonte frecuentemente se halla en la ciudad), constituyen el «Perú oficial».

Nos ocuparemos en detalle de los otros sectores sociales porque es en ellos donde se están produciendo los fenómenos más significativos en la dinámica socio-política del país.

Las masivas migraciones que se vienen produciendo desde la década de 1950 hacia las ciudades costeras y especialmente hacia Lima no han encontrado el correlato de una oferta ocupacional que sirviera de base para una integración social efectiva. La debilidad del proceso de industrialización impidió la consecución de este cometido, al tiempo que la estructura del Estado consumaba la marginación política de estos grupos. Comenzó entonces, sobre la premisa de la adaptación a los valores y patrones culturales de una sociedad blanca excluyente, un contradictorio proceso de aculturación en el que coexisten referencias culturales de la sociedad rural-patrimonial y las manifestaciones propias de una sociedad del capitalismo tardío. De la marginación surgen innumerables actividades laborales para subsistir en precarias condiciones. La proliferación de oficios «informales», generalmente de servicios, actúa como una verdadera membrana que permite la filtración de recursos desde las capas integradas urbanas a los sectores menos integrados. Estas actividades constituyen la precaria base material desde la que se construye su

identidad social y política. «Cuando la modernización logra reemplazar la estructura tradicional por otra moderna, los individuos emergentes buscan compensar su soledad, ansiedad e incertidumbre creando espacios comunes que no sólo son instrumentos de lucha, sino también mecanismos de integración social»<sup>18</sup>. La movilización social y la creación de espacios de comunicación nacen así espontáneamente como vehículos de reconstrucción de una identidad individual y grupal dañada, o lo que es peor, desvalorizada. Lo individual y lo social (acaso la conciencia de la movilidad social y la de clase) actúan, en un contradictorio juego de intereses y valores desde un sujeto social cuya identidad está en crisis y por tanto es irreductible a las categorías.

De estos procesos surgen gremios, asociaciones de pobladores, grupos feministas, Comités de Ayuda en los «pueblos jóvenes», además de gran número de agrupaciones que persiguen objetivos asombrosamente concretos. Ante la institucionalidad excluyente del Estado nace espontáneamente una laxa institucionalidad alternativa. En la medida en que estos movimientos sociales fueron cobrando protagonismo, desde las instancias estatales se intentó crear vínculos que, cuando menos, encauzaran políticamente la movilización. Recordemos la experiencia de SINAMOS, durante el velasquismo y el énfasis en el concepto de participación. El gobierno aprista, que siguió en esto la línea de Velasco, ha intentado crear (quizá mejor «crearse») conexiones con los sectores sociales menos estructurados desde su perspectiva basada en la teoría de la «pirámide social»<sup>19</sup>. Decimos «gobierno» y «crearse» porque la conexión es a través de Planes y no de instituciones que consoliden la participación y profundicen, a largo plazo, el proceso democrático.

Ejemplo de estas acciones fue el Programa de Apoyo al Ingreso Temporal (PAIT) que ocupó en Lima a 45.000 trabajadores en los primeros meses de 1986. De ellos el 76% eran mujeres, el 84% migrantes desocupados y el 44% analfabetos. El presupuesto destinado a esta primera fase fue de 8 millones de dólares<sup>20</sup>. El fantasma del populismo se hizo patente cuando la coordinación aprista de las cuadrillas enfrentó en alguna ocasión a miembros del PAIT con otros trabajadores en huelga, en una absurda guerra entre pobres y miserables. Otro ejemplo, ya decididamente dentro de la línea de la tradición populista, fue el Programa de Apoyo Directo (PAD), financiado directamente desde el Ministerio de Presidencia,

en el que se entregaron electrodomésticos y víveres a pobladores en una acción que debilita las prácticas sociales y aumenta la subordinación de los pobladores al gobierno.

Más significativos, en la medida en que se transformen en costumbre y en derecho fueron los Encuentros Populares celebrados entre 1986 y 1987 y que afectaron tanto a los movimientos sociales urbanos como rurales. Los convocantes han sido el Gobierno central (Encuentro con las Asociaciones de Madres de Lima y Conversatorios Regionales —Rimanacuys— en Piura, Chiclayo y Cusco), la Municipalidad de Lima (Encuentro Metropolitano de Comités de Vaso de Leche), agrupaciones sindicales como la Confederación Campesina de Perú (Encuentro Nacional de Rondas Campesinas y Asamblea Nacional de la Mujer Campesina), Confederación General de trabajadores Peruanos y otros (Encuentro preparatorio de la Asamblea Nacional Popular) e instituciones privadas como Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo —DESCO—, Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación —CEDEP— y otros (Encuentro Nacional de Autogestión).

La mera celebración de estos encuentros revela por parte de las instituciones oficiales participantes el reconocimiento de la crisis de representación por la que atraviesa el sistema político nacional <sup>21</sup>. En cuanto a los organizados por el gobierno, es evidente que, fiel a su concepción de la sociedad, se soslaya deliberadamente el debate con las organizaciones formales (en los Rimanacuys no participaron la CCP, la CNA ni el Congreso Unitario Nacional Agrario —CUNA—, sino a través de sus bases) eligiéndose desde arriba a los interlocutores sociales.

El valor de la experiencia de los movimientos sociales se mide de acuerdo con sus logros. En la medida que sean capaces de elevar su participación política, consiguiendo poder de decisión en sus asuntos, podrán superar la situación objetiva que les dio origen: dando un paso más en la construcción de una sociedad verdaderamente integrada.

### 3. La guerrilla. Violencia estructural y violencia armada

Hemos dejado para el final el análisis del sector rural-tradicional por su relación con un fenómeno que está teniendo creciente importancia en la vida política del país: la violencia armada.

Este sector se halla ubicado especialmente en la Sierra central y Sur del país, aproximadamente entre los departamentos de Huancavelica y Puno. En esta región se encuentran los departamentos más pobres, como son Apurímac, Ayacucho y Huancavelica; el llamado «trapecio andino del Perú». A las inclemencias de la puna andina se sumaron históricamente diversas formas de explotación desde los tiempos del incario. La conquista española trajo la mita primero, los encomenderos luego y finalmente los hacendados que se saciaron de propiedad en los primeros tiempos de la República. La población, predominantemente quechua en el Norte y aymara en el Sur, pasó de la comunidad a la esclavitud y de ésta a la servidumbre. La situación de pobreza endémica es la base objetiva que dio lugar a movilizaciones campesinas que cobraron relevancia desde la segunda mitad de la década de los cincuenta. Los más importantes fueron el de los hermanos Cáceres en Puno y el liderado por Hugo Blanco en La Convención (Cusco). Durante el período de Velasco, la reforma agraria repartió tierras entre los campesinos pero su escasa productividad (debido a la altitud y a las características del suelo) no solucionó el problema de las comunidades.

La organización territorial, trazada en torno a los intereses costeros, impidió también una comunicación saludable de la región, que impulsara su desarrollo. En el caso de Ayacucho, por ejemplo, tres son los fenómenos que marcan su evolución socio-económica: estancamiento y empobrecimiento del centro (especialmente debido a la penetración de manufacturas y productos agrícolas extranjeros), pérdida de la periferia (por vinculación de algunas provincias como Lucanas y Parinacochas a centros costeros como Nazca y Chala) y profundización de la subordinación a otros polos regionales (las provincias del Sur al eje Ica-Nazca-Chala y las norteñas a Huancayo y Lima) <sup>22</sup>.

Esta es la base objetiva sobre la cual se organizó la lucha armada de Sendero Luminoso. Es evidente que la mera situación de pobreza, si bien está en las raíces del fenómeno, no completa su explicación. Si así fuera, el mundo se ahogaría en estos momentos en las luchas por una distribución más justa de los recursos y contra la explotación. La creación de las que podríamos llamar «condiciones subjetivas» (una determinada percepción y explicación de los fenómenos sociales, de las que se derivan las acciones correspon-

dientes) fue un largo proceso cuyo origen es difícil de precisar, pero que se acelera y caracteriza nitidamente desde 1959, año en que se reabre la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) <sup>23</sup>.

Rápidamente ganan terreno en la organización de la Universidad los militantes de partidos de izquierda que crean el Frente Estudiantil Revolucionario (FER), controlado por el PCP. En 1962 asume el rectorado de la Universidad Efraín Morote, quien tendrá una destacada labor en la consolidación institucional de la misma. Ese mismo año llega a Ayacucho Abimael Guzmán, futuro líder de Sendero Luminoso, que es nombrado responsable del trabajo juvenil en el Comité Regional del PCP.

En 1964 el PCP se divide entre los partidarios de la línea soviética (PCP-Unidad) y los partidarios de la línea china (PCP-Bandera Roja). El Comité Regional, encabezado por Saturnino Paredes, se alinea con las posiciones pro-chinas y comienza una ferviente actividad organizativa cuyo punto más alto es la creación en 1966 del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FMPPA), con el que el PCP-BR se afianza fuera de la Universidad. Entre 1966 y 1969 la organización atraviesa una etapa de esplendor, pero al año siguiente se produce la ruptura entre el grupo de Paredes, por entonces estrechamente vinculado a la acción de tomas de tierras desplegada por la CCP, y el grupo de Guzmán reducido al FER y partidario de una acción más global <sup>24</sup>.

Resulta esencial apreciar que, paradójicamente, el PCP-SL nació alejado de todo apoyo del campesino, que se inclinaba hacia las tácticas más concretas de la CCP y el PCP-BR. Su bastión era el FER y el Consejo Ejecutivo de la Universidad. Sin embargo, va surgiendo en el seno de ésta una oposición a SL y en 1974 pierde la hegemonía. Un año después fracasa el intento de crear una propia CCP, por lo que el movimiento queda prácticamente aislado. Su acción queda reducida al Programa de Educación y el control del Sindicato Unido de Trabajadores de la Enseñanza de Huamanga (SUTE-Huamanga). En la línea del primero se produce en 1975 la toma de los Planteles de Aplicación «Guamán Poma de Ayala» de la UNSCH, donde se impartían clases de educación secundaria en cinco aulas y dos turnos. Los activistas de SL mantienen tomado el local durante 18 meses, durante los cuales dictan clases, matriculan y extienden certificados, apoyados por los padres de familia.

Durante los últimos años de la dictadura, las acciones del PCP-SL se limitaron a boicotear las huelgas y demás acciones de la izquierda, organizar cuadros en torno al pensamiento de Mao (especialmente el Mao anterior a la Revolución Cultural) y esperar el momento de iniciar la lucha armada. Sus primeras acciones tuvieron lugar fuera de Huamanga, donde la vida política se había complejizado demasiado como para conseguir apoyos generalizados e incondicionales. Se eligieron para ello las cuencas del Alto Pampas y el Ccaracha, entre las provincias de Víctor Fajardo y Cangallo. Diversos factores pueden apuntarse para explicar la elección: la extrema pobreza y aislamiento de la región, la cultura de tipo comunal que contaba con varios centros educacionales, la tradición antiestatal que se proyecta desde el siglo pasado a través de diversas luchas (las últimas en la década de 1960 para impedir la instalación de puestos policiales) y la escasa participación en las organizaciones promovidas por la institucionalidad oficial <sup>25</sup>.

Entre 1980 y 1982 el grupo guerrillero avanzó y se extendió por toda la región, pero el año siguiente el conflicto cobrará nuevas dimensiones. El gobierno central da paso a la acción de las Fuerzas Armadas y el Ejército se hace cargo de la represión. Ahora la situación es más tensa y dramática; las comunidades se encuentran muchas veces entre dos fuegos: por un lado Sendero Luminoso que procura el aislamiento de sus principales zonas y el mantenimiento de adhesiones incondicionales en su estrategia de «guerra prolongada del campo a la ciudad» y por otro el Ejército que tiende a ver un senderista en cada campesino, que moviliza y reubica a poblaciones enteras, que forma «montoneras» entre los pobladores para enfrentar campesinos contra campesinos y que, escudado en el estado de emergencia desconoce muchas veces los más elementales derechos humanos, induciendo respuestas del mismo tenor <sup>26</sup>. Desde entonces SL si bien no puede defender prolongadamente ningún territorio, se ha extendido a otras zonas del país, amenazando cercar Lima desde sus extremos serranos Norte y Sur.

Evidentemente la solución del problema planteado excede el nivel militar. Parece, más bien, política y económica. El hecho de que SL destruya obsesivamente los escasos recursos productivos con que cuenta la región (en una incomprendible interpretación de la estrategia revolucionaria) revela el acierto de esta proposición. La

situación parece requerir por parte del Perú oficial, limeño y blanco (inclusive desde dentro de los partidos de la izquierda democrática), un serio y desinteresado esfuerzo comprensivo para romper la dinámica desintegradora que amenaza a esta sociedad. También parece evidente que, ante el cariz de los acontecimientos, ya no alcanza una combinación de medidas económicas y militares. El desarrollo efectivo debió haber venido antes. Ahora la solución está cada vez más vinculada a la esfera política. En este terreno es impensable un avance que no contemple el reconocimiento político y cultural del «otro», la superación de los residuos de autoritarismo e intolerancia presentes en todos los actores por acción o negación del oponente, y el reconocimiento de derechos políticos concretos como el autogobierno de las regiones, la participación política de los monolingües indígenas y otras reivindicaciones ancestrales. Nunca los esfuerzos que se dediquen a ello serán demasiados, si se pretende profundizar en la democratización de la sociedad peruana.

## NOTAS

<sup>1</sup> Ver CARDOSO, C., y PÉREZ BRIGNOLI, H.: *Historia económica de América Latina*. Barcelona, Crítica, 1984, tomo I, pp. 175 y 219.

<sup>2</sup> Ver COTLER, Hugo: «La construcción nacional de los países andinos», en *Pensamiento Iberoamericano*. Madrid, 1984, julio, n.º 6, p. 120.

<sup>3</sup> Ver HALPERIN DONGHI, Tulio: *Historia contemporánea de América Latina*. Madrid, Alianza, 1985, p. 141.

<sup>4</sup> MARIATEGUI, José Carlos: *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Barcelona, Crítica, 1976.

<sup>5</sup> Ver ALBERTI, Giorgio: *Notes on a framework for the analysis of the politics of democratic consolidation in Latin America and an illustration from the case of Peru*. Trabajo presentado al seminario «Perspectivas y dilemas de la consolidación democrática en América Latina». Rimini, abril, 1988, p. 43.

<sup>6</sup> FRANCO, Carlos: *Perú: participación popular*. Lima, Ediciones CEDEP, 1979, p. 43.

<sup>7</sup> Obviamente las contradicciones que planteaba la emergencia de este cuadro social se reproducían en el interior de las Fuerzas Armadas. Un grupo se mostraba partidario de la profundización de las reformas en una dirección de corte socialista. Otro apostaba directamente por la contención autoritaria de las demandas populares y la restauración de las instituciones de la tradición oligárquico-republicana. Finalmente estaban quienes planteaban el carácter eminentemente profesional de las Fuerzas Armadas y la necesidad de volver a sus cauces institucionales.

<sup>8</sup> Estas apreciaciones están sintética y precisamente expuestas en el

trabajo de BALLÓN ECHEGARAY, Eduardo: «Estado, sociedad y sistema político peruano: Una aproximación inicial», en *Síntesis*. Madrid, 1987, septiembre-diciembre, n.º 3, p. 108 y ss.

<sup>9</sup> Estas ideas están desarrolladas en GARCÍA BELAÚNDE, Domingo: «Sistema electoral y representación política en el Perú actual», en *Sistemas electorales y representación política en Latinoamérica*. Madrid, Fundación Ebert, 1986, p. 45 y ss.

<sup>10</sup> Para el seguimiento de estos procesos electorales, especialmente el de 1985, ver GARCÍA BELAÚNDE, Domingo: *Una democracia en transición. (Elecciones peruanas de 1985)*. San José, CAPEL, 1986.

<sup>11</sup> Ver MATOS MAR, José: «Crisis del Estado y desborde popular en el Perú», en *Síntesis*, op. cit., p. 89.

<sup>12</sup> Ver ALBERTI, Giorgio: *Op. cit.*, p. 54.

<sup>13</sup> A este rápido desgaste contribuyeron, además de una discutible política económica, el intento de reforma constitucional para permitir su reelección, la relación no aclarada del presidente con la muerte de 300 prisioneros en un penal del país y el fracaso del diálogo con representantes de los 12 grupos económicos más importantes (realizado, por otra parte, a espaldas de los sectores populares).

<sup>14</sup> IU esta formada por los siguientes partidos:

- Partido Comunista Peruano (PCP).
- Partido Unificado Mariateguista (PUM).
- Partido Comunista Revolucionario (PCR).
- Partido Socialista Revolucionario (PSR).
- Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP).
- Acción Política Socialista (APS).

<sup>15</sup> El argumento está en la línea del libro de DE SOTO, Hernando: *El otro sendero*. Lima, El Barranco, 1986; donde se confunde la llamada «economía informal» nacida de la marginación en el subdesarrollo y la «economía subterránea» de los países desarrollados. Ver GROMPONE, Romeo: «El difícil populismo de derecha», en *Qué hacer*, n.º 49. Lima, 1987, noviembre-diciembre, p. 46 y ss.

<sup>16</sup> Uno de los mejores ejemplos es: PINTO, Anibal: *Notas sobre la naturaleza e implicaciones de la heterogeneidad estructural de América Latina*. Santiago, Cursos ILPES, 1979.

<sup>17</sup> Este interesante planteamiento está desarrollado en FRANCO, Carlos: «Nación, Estado y clases. Condiciones para el debate en los ochenta», en *Socialismo y Participación*. Lima, 1985, marzo, n.º 29.

<sup>18</sup> LÓPEZ JIMÉNEZ, Siniciso: «El otro lado del asedio», en *Cuestión de Estado*. Lima, 1987, septiembre, n.º 1, p. 20.

<sup>19</sup> Según esta visión todos los sectores orgánicamente agrupados están en el extremo superior de la pirámide (obreros, empleados, empresarios, financistas, funcionarios, etc.). En la base se halla el 60 ó 70 % de la población desempleada o subempleada y con ingresos inferiores al salario mínimo vital.

<sup>20</sup> Ver BALLÓN ECHEGARAY, Eduardo: *Op. cit.*, p. 116, y PEASE GARCÍA, Henry: «El populismo aprista», en *Síntesis*, op. cit., p. 142 y ss.

<sup>21</sup> Ver MONTERO, Edith: «Una base sin vértice», en *Cuestión de Estado*, op. cit., p. 9.

<sup>22</sup> Ver DEGREGORI, Carlos: *Sendero Luminoso: Los hondos y mortales desencuentros*. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1986, pp. 21-22.

<sup>23</sup> Ver FAVRE, Henry: «Desexorcizando a Sendero», en *Síntesis*, op. cit., pp. 244-245.

<sup>24</sup> El nombre «Sendero Luminoso», con el que se conoce a este grupo escindido del PCP-BR, está tomado por los periodistas e investigadores del membrete del FER de la UNSCH donde se leía: «Por el sendero luminoso de José Carlos Mariátegui». En adelante se le identificaría como PCP-SL.

<sup>25</sup> Ver DEGREGORI, Carlos: *Op. cit.*, pp. 41-42.

<sup>26</sup> *Ibidem*, pp. 49-50.

